

## La ciudadanía y los movimientos populares en la República Dominicana

*Emelio Betances<sup>1</sup>*

Los movimientos populares profundizan el proceso de construcción de la ciudadanía social. El éxito o el fracaso de estos movimientos se deben a las estructuras globales y locales de poder que imponen límites a la capacidad del Estado para responder a las demandas para ampliar los derechos de la ciudadanía. La resistencia social a las reformas neoliberales de los ochenta declinó en los noventa, pero no se pudo evitar que después de 2009 se formaran movimientos exitosos: el ecologista y el 4% para la Educación. Estos movimientos de clase media reactivaron los procesos de construcción de la ciudadanía social.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Doctor en Sociología por Rutgers, The State University of New Jersey. Catedrático en Sociología y Estudios Latinoamericanos Gettysburg College. Especialista en Sociología Política, Sociología Histórica y Comparada, Desarrollo Social, Religión, Estudios de Ciudadanía y Estudios Latinoamericanos.

<sup>2</sup> Quisiera darle las gracias a Giselle Rodríguez en República Dominicana por realizar la traducción de este trabajo del inglés al español. La versión en inglés aparecerá en *Popular Sovereignty and Constituent Power in Latin America: Democracy from Below*, compilado por Emelio Betances y Carlos Figueroa-Ibarra (New York: Palgrave)

## INTRODUCCIÓN

Los movimientos populares han sido factores importantes en el desarrollo social y político de la América Latina contemporánea. Estos se han caracterizado por abarcar un amplio espectro político y social, que incluye al movimiento sindical y campesino, sectores de clase media, e incluso una parte de los niveles más bajos de la burguesía. A diferencia de los años 1960 y 1970, cuando la izquierda revolucionaria jugó un papel significativo en estos movimientos y quería orientarlos hacia el socialismo, hoy los líderes de algunos países de la región han querido transformar la democracia liberal en el socialismo del siglo XXI mediante la integración de los movimientos populares al Estado como sujetos políticos con sus propias voces. En otros países los movimientos populares han sufrido reveses como en la República Dominicana, Guatemala, y El Salvador y han tratado de integrarse al sistema político sin transformar la democracia liberal (Faxas, 2007; Figueroa-Ibarra, 2006; Almeida, 2014; Spalding, 2014). En cambio, en Venezuela, Bolivia y Ecuador los movimientos sociales han sido sujetos claves en los procesos de transformación de la democracia liberal en democracia participativa (Azellini, 2012; Ellner, 2014). Estos contrastes muestran que los procesos políticos en América Latina son heterogéneos y que las características de los movimientos populares varían de manera sustancial.

El análisis se centra en la República Dominicana, donde el movimiento sindical y popular resistió a la aplicación de las políticas neoliberales mediante un levantamiento que duró tres días en abril de 1984 que dejó más de 120 personas muertas, 157 heridos y más de 4,000 detenidos. Este levantamiento constituyó un parteagua en el ciclo de protesta que retó a la implementación de una política económica de corte neoliberal.<sup>3</sup> Como se verá mas adelante, estos movimientos sufrieron una derrota en los noventa debido a

<sup>3</sup> Para más detalles sobre el levantamiento de 1984 ver «The Dominican Grassroots Movement and the Left, 1978-1986, *Science and Society*, vol. 79, Núm. 3, julio de 2015 y mi libro *En busca de la ciudadanía: los movimientos sociales y la democratización en la República Dominicana*, Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2016.

la exitosa aplicación de nueva política económica, la represión del Estado y a su fragmentación político-ideológicas. Sin embargo, los movimientos populares se transformaron al final de la siguiente década en movimientos de clase media que desafiaron a las políticas neoliberales. En busca de explicar estos fenómenos aquí se plantean dos interrogantes:

1. ¿Por qué la globalización neoliberal y su consiguiente polarización socioeconómica, lejos de provocar un resurgimiento de las protestas populares, las debilitaron y redujeron su capacidad de influir en la política social?
2. ¿Por qué y en qué medida los movimientos de clase media, en particular, el ecologista y el del 4% para la educación, fueron capaces de obtener un éxito relativo después de 2009? Aquí se plantea que los movimientos populares de protesta son fundamentales para la construcción de la ciudadanía social. Llegamos a la conclusión de que estos movimientos empezaron a reactivar la construcción de la ciudadanía a través de sus luchas por la protección ambiental y exigiendo que el gobierno asigne recursos suficientes para la educación.

#### LAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LA CIUDADANÍA SOCIAL Y LOS MOVIMIENTOS POPULARES

El análisis se basa en la literatura reciente sobre movimientos sociales que examinan las conexiones entre estos y la construcción de la ciudadanía social. Franco (1994) Jelin y Hershberg (1996), Dagnino, (2003), Merklen (2005), Yashar (2005), y Holston (2008), sentaron las bases para el estudio de los movimientos sociales y ciudadanía social en América Latina. A diferencia de la mayoría de los estudiosos de la transición y la consolidación de la democracia, que por lo general definen la ciudadanía en términos de derechos civiles y políticos, estos autores se centran en el contenido social de la ciudadanía y reconocen que la clase, la desigualdad social, y las capacidades de un Estado son importantes. Por ejemplo, en su estudio de dos barrios

en el municipio de São Paulo –Jardim das Camélias y Lar Nacional– Holston encontró que en las periferias de las ciudades brasileñas, desde la década de 1970, las clases trabajadoras han formulado una ciudadanía insurgente que desestabiliza la élite en el poder. Sostiene que, contrariamente a la teoría social del siglo XIX y XX sobre las clases trabajadoras, «los miembros de esas clases se convirtieron en nuevos ciudadanos no principalmente a través de las luchas obreras, sino por las de la ciudad - un proceso que me parece abarca todo el sur global» (Holston, 2008: 4). Holston se basa en el legado de T.H. Marshall quien definió la ciudadanía en términos de derechos civiles, políticos y sociales (Marshall, 1964: 71), pero añade los derechos de suelo urbano como un cuarto elemento de la ciudadanía.

Aunque la ciudadanía social abarca una gran variedad de derechos sociales, incluyendo salud, vivienda, electricidad, género, etnia, raza y orientación sexual, este análisis se centra en los derechos educativos y ambientales ~~aire limpio, el agua potable, y a la preservación de la naturaleza~~ (Isin y Turner, 2002, Isin, 2008). En este contexto, el problema esencial con los movimientos populares en América Latina no es solo si el Estado reconoce los derechos sociales, sino hasta qué punto puede cumplir con lo que promete.

Por otro lado, el Estado otorga y limita la ciudadanía, así como define proyectos nacionales (Franco, 1998; O'Donnell, 1996 y 2001; Hobsbawm y Ranger, 1983). De hecho, el Estado sirve de marco a la interacción entre los movimientos sociales y las autoridades públicas, y otorga los derechos de ciudadanía, pero no siempre es «competente, propositivo, coherente y capaz» (Yashar, 2005:6). Por ejemplo, en América Latina, las instituciones del Estado encargadas de la prestación de servicios sociales suelen ser débiles y estar mal estructuradas. Esta situación se deterioró en la mayoría de países en la década de 1980, cuando el Estado perdió su capacidad para formular la política socioeconómica porque la transfirió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras multilaterales (Franco, 1993: 50-60). Durante la última década, algunos Estados han recuperado cierta capacidad de controlar sus recursos nacionales y ejecutar políticas económicas (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, etc.), pero la mayoría no ha sido capaz de

hacer este tipo de avance y permanece bajo restricciones impuestas por los organismos financieros multilaterales.

En América Latina el establecimiento de regímenes democráticos liberales presenta un dilema: a pesar de la promesa de igualdad política, el legado del colonialismo, el capitalismo dependiente, las profundas desigualdades sociales y la formación incompleta del Estado-nación, limitan el accionar del Estado. Por otra parte, la industrialización sustitutiva de importación (ISI) durante el siglo xx no engendró una clase obrera fuerte con capacidad para influir en la construcción de la ciudadanía social (Rueschemeyer et al, 1992: 155-225). En ese contexto, es difícil, si no imposible de replicar el régimen euro-americano de la democracia liberal, sin hacer modificaciones sustanciales. La industrialización capitalista, el colonialismo y el imperialismo habilitaron a los Estados europeos para ampliar los derechos sociales de la ciudadanía en el último tercio del siglo xix y, de manera más sustancial, después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa occidental, la industrialización hizo posible el surgimiento de un movimiento significativo de la clase obrera a favor de la democracia, que exigía mayores derechos. Como concluye Karl de Schweinitz: «el desarrollo de la democracia en el siglo xix se dio en función de una configuración inusual de circunstancias históricas, que no se pueden repetir. La ruta euro-americana hacia la democracia está cerrada y otros medios ahora deben ser concebidos para la construcción de nuevos estados democráticos» (De Schweinitz, 1964: 10-11).

Esta investigación se enfoca en la experiencia de los movimientos populares en la República Dominicana<sup>4</sup> y propone que el éxito o el fracaso de estos se deben a las estructuras globales y locales de poder que imponen límites a la capacidad del Estado para responder a las demandas para ampliar los derechos de la ciudadanía social. La globalización y las reformas neoliberales del decenio de 1980 contribuyeron al descenso del movimiento sindical y popular barrial en la

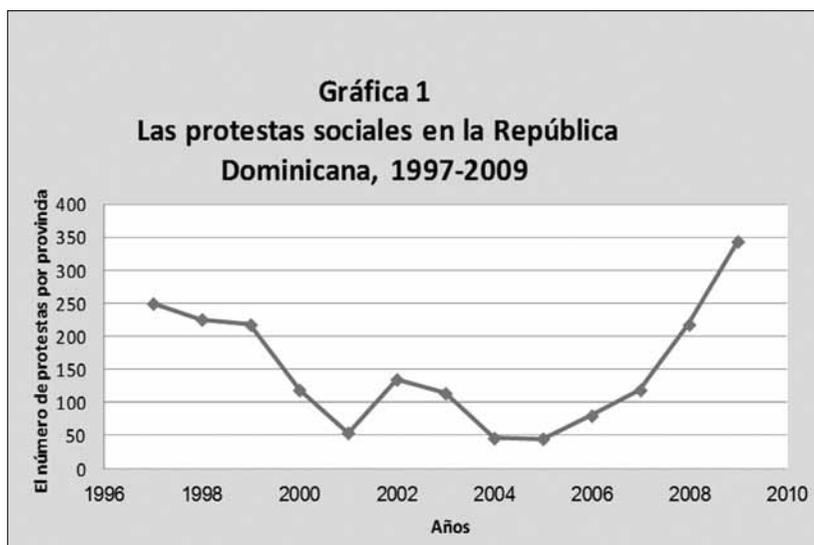
<sup>4</sup> La metodología empleada para escribir este artículo se basó en entrevistas realizadas a líderes populares entre 2007 y 2014, artículos publicados en la prensa dominicana y documentos oficiales. Una lista parcial de las entrevistas aparece en la bibliografía.

década de 1990, pero no pudieron evitar, después del 2009, el éxito relativo de los movimientos ecologista y del 4% para la Educación. Estos movimientos de clase media reactivaron los procesos de construcción de la ciudadanía social.

#### LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y EL CAMBIO CULTURAL

La aplicación de las reformas económicas neoliberales desde principios de 1980 representa un punto de inflexión en la historia dominicana reciente. En 1984, la gestión de Salvador Jorge Blanco (1982-1986) firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para realizar un ajuste reestructural que devaluaba la moneda nacional, reducía el gasto social y eliminaba los subsidios, a excepción del petróleo y sus derivados. Estas políticas estaban destinadas a la transformación de la economía de las exportaciones agrícolas y de minerales a una economía orientada a servicios afincados en las zonas francas, el turismo, el comercio, etc. El cambio cultural nacional que se produjo en la década de 1990 fue producto de la transformación socio-económica promovida por la globalización neoliberal.

La implementación de estas reformas provocó un levantamiento en 1984, seguido de un ciclo de protestas sindicales y populares que se prolongó hasta 1992. Si bien el mandato de Joaquín Balaguer (1986-1990) redujo la aplicación de las reformas neoliberales, continuó recortando el gasto público en la educación y la atención de la salud, y los salarios se mantuvieron bajos en todos los ámbitos. Debido a esto, las protestas que habían comenzado con la gestión anterior continuaron y, mientras tanto, Balaguer utilizó tácticas de mano dura para hacer frente a los manifestantes y los mantuvo divididos haciendo ciertas concesiones menores. Después de ganar la reelección en 1990 por un ligero margen contra su viejo rival, Juan Bosch, firmó un acuerdo con el FMI, que profundizó la transferencia de las facultades del Estado para definir las orientaciones de las políticas económicas y sociales a los organismos multilaterales, una política que sigue en pie hoy en día.



Fuente: PNUD. *Informe sobre desarrollo humano*, República Dominicana, 2008: 442. Datos cortesía de la profesora Tahira Vargas.

Las políticas económicas neoliberales generaron movimientos populares en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, etc. Lo contrario ocurrió en la República Dominicana. ¿Cómo se explica esta divergencia? En primer lugar, los movimientos sindicales y populares se habían fragmentado en múltiples organizaciones y no pudieron coordinar sus esfuerzos y, en segundo lugar, estaban profundamente divididos política e ideológicamente. En estas circunstancias, no fue difícil para Balaguer negociar con el FMI sin tomarlos en cuenta. A través de la década de 1990 y una buena parte de la primera década del 2000, las organizaciones sindicales y populares fueron incapaces de mantener la unidad. Como se muestra en la Gráfica 1, de 1997 a 2009, las protestas sociales sufrieron una disminución dramática, que terminó en 2005. A partir de entonces, se observa un incremento significativo que continuará hasta más allá del 2009. En todo caso, la disminución de las protestas sociales en la década de 1990 y principios del 2000 no pueden explicarse únicamente por la aplicación de políticas económicas neoliberales. Durante los años 1990 y la década siguiente, ocurrieron cambios significativos en el mundo, lo

que produjo un profundo cambio cultural en América Latina y, en particular, en la República Dominicana. Estos incluyen el derrumbe del bloque socialista, la globalización neoliberal, el crecimiento del individualismo, el consumismo, e incluso el narcotráfico (Cassá, 2004: 184-189).

El bloque socialista había creado la utopía de una alternativa al capitalismo, pero la disolución de la antigua Unión Soviética y el campo socialista marcó el final de esta experiencia. Un pequeño, pero significativo número de intelectuales dominicanos de clase media simpatizaba con esta utopía y, como consecuencia, apoyaba los partidos y organizaciones que hablaban de justicia social y participaban en actividades políticas de izquierda. Cuando la Unión Soviética se hundió en 1991, el sueño terminó y muchos intelectuales de izquierda comenzaron a abandonar las ideas colectivistas y de solidaridad con los movimientos populares. En cambio, muchos intelectuales y profesionales de clase media aprovecharon la oportunidad para insertarse en los partidos políticos dominantes o aceptaron cargos en el  ~~bierno~~ que muchos utilizaron para enriquecerse. Por ejemplo, muchos periodistas e intelectuales críticos que habían jugado un papel clave en la condena de la corrupción oficial y la defensa de la justicia social, en los años 1970 y 1980, dejaron de brindar información sobre temas que no eran del agrado de los funcionarios del  ~~bierno~~; se auto-censuraron a cambio de dinero.

Segmentos importantes de los medios de comunicación, lejos de apoyar la protesta social, comenzaron a judicializarla presentando a los manifestantes como vándalos que querían «pescar en río revuelto». No hay duda de que había delincuentes en las protestas públicas, pero gran parte de los principales medios de comunicación exageraron la imagen popular para desacreditar a cualquiera que participara en dichas actividades.

La República Dominicana refleja un patrón ahora bien establecido en Centroamérica, México y Sudamérica de cambio ideológico hacia la derecha. Consideremos, por ejemplo, el caso de Joaquín Villalobos, excomandante de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, que ofreció sus servicios al régimen neoliberal de Carlos Salinas de Gortari en México

sobre cómo tratar con el levantamiento zapatista de 1994. Otro caso interesante es el de Jorge Castañeda, un intelectual mexicano que emigró, ideológicamente, de ser un miembro del Partido Comunista Mexicano para convertirse, finalmente, en Ministro de Relaciones Exteriores durante el ~~gobierno~~ gobierno de Vicente Fox Quezada del Partido de Acción Nacional (PAN), un partido de derecha que había abrazado las reformas neoliberales impulsadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la República Dominicana intelectuales importantes, como el sociólogo Carlos Dore Cabral, exmiembro del Comité Central del Partido Comunista Dominicano o Marcos Villamán, renombrado teólogo de izquierda se unieron al ~~gobierno~~ gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) y abandonaron su identificación con las organizaciones populares. Otros dirigentes populares simplemente envejecieron, se casaron, se establecieron, dedicando menos tiempo a las actividades comunitarias

Además, las cuestiones personales de subsistencia jugaron un papel importante en medio de los cambios que se estaban produciendo en los noventa. Los que no podían encontrar un empleo en el ~~gobierno~~ gobierno o en organizaciones no gubernamentales (ONG), se incorporaron a una iglesia evangélica como pastores, crearon grupos musicales de bachata o simplemente se fueron a Estados Unidos o Europa para buscar una vida mejor. La migración afectó de modo desproporcionado a los movimientos sindicales y populares.

La globalización neoliberal trajo consigo la ideología del individualismo, es decir, «sálvese quien pueda». En consecuencia, la participación en la corrupción y actividades económicas ilícitas ya no era moralmente reprochable. El clientelismo, que en la imaginación popular se limitaba al Partido Reformista de Balaguer, fue adoptado por el PRD en el decenio de 1980 y por el PLD a finales de 1990. De hecho, tratando de combatir este problema, el presidente Leonel Fernández (1996-2000) propuso aumentar los salarios de los altos funcionarios del Gobierno para detener la corrupción, pero no pudo evitar su extensión a casi todos los niveles de la burocracia gubernamental.

La aplicación de las políticas económicas neoliberales abrió la economía al mercado internacional, lo que lleva al desarrollo sin

trabas del consumismo. Sustentados por gigantes acondicionadores de aire, las nuevas cadenas de supermercados y centros comerciales crearon espacios donde los consumidores de clase media y media alta pueden sentirse cómodos para ir de compras, lejos del calor y del ruido de la población empobrecida. Estos nuevos centros comerciales se convirtieron en los signos de la prosperidad en la sociedad neoliberal.

La gran prensa y los nuevos medios electrónicos revelaron que allende el mar había diferentes y mejores condiciones de vida que las que prevalecen en la República Dominicana. Estos medios construyeron falsas expectativas porque pocos tienen el privilegio de alcanzar el nivel de vida que se muestra en la televisión o a través de Internet. Del mismo modo, el turismo expone a los ciudadanos al nivel de vida que ven en la televisión, pero no les dice cómo alcanzarlo. Esto tal vez explica por qué el narcotráfico es tan atractivo para muchos que son incapaces de lograr lo que ven en la televisión. Eso explica por qué en las últimas tres o cuatro décadas, el narcotráfico penetró profundamente el tejido de la sociedad, dejando un legado que no es fácil de revertir. En pocas palabras, no es que la condicionalidad de las estructuras globales de poder, la aplicación de las políticas económicas neoliberales, y la posterior reinserción de la sociedad en la nueva economía global probablemente sean la causa directa de la disminución de los movimientos populares, pero sí son causantes de la desigualdad social y tienen mucho impacto en la organización y reorientación de las condiciones de vidas en los barrios pobres. La gestión de Hipólito Mejía (2000-2004) se dio cuenta de este reto e implementó programas sociales para aliviar la pobreza.

LAS PEQUEÑAS OBRAS PÚBLICAS, LA LEY DE SALUD,  
Y LA DESINTEGRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE IZQUIERDA

La aplicación de un programa de pequeñas obras públicas y la desintegración de las organizaciones de izquierda fueron dos factores adicionales que ayudaron a desmovilizar a los movimientos populares. El mandato de Hipólito Mejía inició una política de

pequeñas obras públicas para hacer frente a las necesidades de la población empobrecida. En contraste con la política de construcción de la gestión de Leonel Fernández (1996-2000), que se centró en la inversión en las grandes obras públicas, Mejía quería tener un impacto en los barrios que habían votado por él. Construyó alrededor de 2,000 pequeñas obras públicas y se centró en los barrios pobres de las zonas urbanas y rurales. Estas obras incluyen pequeños hospitales, escuelas, pequeños acueductos, así como reparaciones de viviendas, canales de riego y centros comunitarios (Durán, entrevista telefónica, 2014). Vale la pena mencionar que a instancias de Mejía, en 2001, el Congreso aprobó una ley que reestructuró el sistema nacional de salud, con la promesa de ampliar la cobertura de atención de salud en todo el país, pero trece años después (2014) el 43% de la población no tiene seguro de salud y menos del 50% de las personas pensionadas han recibido una pensión (7dias.com.do).

Las políticas de Mejía fueron clientelistas y reprodujeron los métodos autoritarios tradicionales utilizados para ganar apoyo político de la población, pero merece crédito por su programa de obras públicas y la Ley Nacional de Salud. Estas políticas tuvieron un efecto importante en la población como lo demuestra el hecho de que las protestas cayeron dramáticamente durante los dos primeros años de su gestión como se observa en el Gráfico 1. Los mandatos posteriores de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) completaron los proyectos de obras públicas iniciados por Mejía, pero no hicieron cumplir plenamente ~~la ley de salud o la ley de educación~~ que el Congreso aprobó en 1997. Las gestiones se concentraron en las inversiones en grandes obras públicas, como la primera y segunda línea del Metro de Santo Domingo, la ampliación de las grandes avenidas de Santo Domingo y Santiago, etc. En consecuencia, los años de Fernández en el poder significaron la debilitación de la ciudadanía social y el aumento de la polarización social.

La cooptación y la represión gubernamental también jugaron un papel importante en la reducción de las protestas sociales. Durante la gestión de Fernández (1996-2000), el Gobierno comenzó a aplicar una política conocida como «Es mejor pagar que matar». A través de esta política, el régimen trató de cooptar líderes de la

comunidad que estaban dispuestos a abandonar a las organizaciones de protesta y aceptar empleos públicos o simplemente recibir un sueldo sin trabajar. Sin embargo, estas ofertas eran limitadas y no pudieron evitar la protesta pública, que a finales de los noventa y principios de la década del 2000 llegaron a ser más violentas (Rojas, entrevista, 2007; Pirón, entrevista, 2007). La violencia se desataba cuando la Policía Nacional llegaba a la escena de una protesta pacífica y atacaba a los manifestantes. A menudo, la violencia estallaba porque los individuos no identificados, supuestamente pertenecientes a organizaciones de izquierda, entraban en la escena para «pescar en río revuelto». Los organizadores de las protestas afirmaban que estos eran agentes provocadores pagados por la Policía Nacional para causar problemas, pero estas acusaciones eran siempre negadas. En cualquier caso, la participación de delincuentes en huelgas las convirtió en huelga-motines que acabaron con manifestantes heridos, detenidos, y en algunos casos muertos (Cassá, 2004:193; Santana, entrevista, 2007; Polanco, entrevista, 2007; Bretón, 2007; Ferreira, entrevista, 2013).

Las protestas sociales se redujeron en todo el país a finales del siglo XIX y han perdido su capacidad de desarrollarse como una fuerza  ~~tra hegemónica~~. La desintegración de las organizaciones de izquierda, los enfrentamientos violentos entre manifestantes y la Policía y, las acciones de los agentes provocadores, presuntamente vinculados a la fuerza del orden, desacreditaron la protesta popular. Las organizaciones de izquierda no fueron capaces de sostener sus campañas para desafiar a un Estado que contó con el apoyo de las clases dominantes, la Iglesia católica, y amplios sectores de intelectuales de clase media. Era imposible para la izquierda construir una coalición que pudiera conseguir apoyo más allá de sus estrechos confines. Si bien es cierto que el Estado aplastó a las organizaciones de izquierda, este no resolvió los reclamos planteados por las organizaciones progresistas, creando así las condiciones para el desarrollo de movimientos populares anclados en la clase media.

## LOS NUEVOS MOVIMIENTOS DE CLASE MEDIA

El proceso de democratización de las dos últimas décadas trajo varias consecuencias: abrió camino para que los grupos de clase media forjaran nuevos movimientos populares en los últimos 6-7 años. El medio ambiente y el 4% para la  ~~educación~~ preuniversitaria se encuentran entre las más importantes de las nuevas luchas de la clase media. A diferencia de la izquierda tradicional, no se trata de grupos anti-sistémicos que buscan derrocar el sistema político, sino de entidades que querían que el Gobierno cumpliera con las leyes existentes y fortaleciera la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos de los depredadores capitalistas. A través de sus luchas, estas organizaciones hacen un aporte a la construcción de la ciudadanía social.

### EL MOVIMIENTO ECOLOGISTA

La preocupación global por los daños causados al medio ambiente debido a la actividad humana afecta a los sectores más sensibles de la clase media. Bajo la presión de las organizaciones internacionales, las autoridades públicas comenzaron a crear instituciones para gestionar los asuntos ambientales. En el 2000, la gestión de Mejía creó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) y 10 años más tarde se convirtió en el Ministerio de Medio Ambiente. Desde sus primeros días, los esfuerzos del Gobierno, enfrentaron la resistencia de varios sectores, en particular, los vinculados al cemento, el turismo y la minería. En marzo de 2009, el Movimiento Campesino Comunidades Unidas (MCCU) se quejó de que las autoridades públicas habían expedido un permiso que permitiría la construcción de una planta de cemento en Gonzalo, Monte Plata, a solo tres kilómetros del Parque Nacional los Haitises. Este parque cuenta con algunos de los mayores mantos acuíferos que abastecen de agua a la ciudad de Santo Domingo. El permiso había sido emitido al Grupo Estrella de Santiago, que había comenzado la construcción de una fábrica de

cemento en la región. La alerta campesina llamó la atención de los jóvenes de clase media organizados, que en ese momento, estaban involucrados en una campaña contra la corrupción en el Gobierno. Entre estos grupos organizados estuvieron La Revuelta, Toy Jarto (estoy hart), Foro Social Alternativo, Juventud Caribe y Revolución 65. Estos grupos también estaban preocupados por las cuestiones ambientales y los daños y perjuicios que una planta de cemento podría causar al Parque Nacional Los Haitises. Posteriormente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias alertaron que la instalación de la fábrica de cemento violaba la Ley 64-00 y afectaría los mantos acuíferos que proveen de agua a la ciudad y las áreas circundantes de Santo Domingo. Sin embargo, Jaime David Fernández,  ministro de Medio Ambiente, sostuvo que apoyaba el proyecto y que este no afectaría al Parque Nacional Los Haitises (Mitchell, 2010: 4).

El rechazo del ministro a las denuncias de los ambientalistas impulsó la lucha en contra de la fábrica de cemento en Gonzalo y dio a luz a un movimiento popular de clase media que organizó vigiliadas, conciertos, y utilizó la prensa y los medios electrónicos intensamente para intercambiar información y convocar para actos de solidaridad con Los Haitises. Una encuesta realizada por Gallup informó que el 90% de la población se oponía la construcción de una fábrica de cemento cerca de Los Haitises. Las manifestaciones públicas, visitas al Congreso, y campañas en los medios obligaron a la gestión de Fernández (2008-2012) a consultar con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyos expertos técnicos estuvieron de acuerdo con la evidencia presentada por la Academia de Ciencias y la USAD. El Grupo Estrella no tuvo más remedio que llevar su fábrica a otro lugar.

El éxito del movimiento de solidaridad con Los Haitises motivó al mismo grupo de organizaciones e instituciones a oponerse a la minera de níquel en Loma Miranda en Bonaó, provincia Monseñor Nouel. Alegaron que Loma Miranda es el lugar de nacimiento de una serie de arroyos y ríos y que la minería a cielo abierto podría causar daños al medio ambiente y afectar la salud de los residentes locales; esto ya ha ocurrido en Pueblo Viejo, en

la provincia Sánchez Ramírez, donde opera la compañía minera Barrick Gold. Este movimiento no fue tan exitoso porque no pudo conseguir el apoyo de fracciones importantes de la élite empresarial como lo hizo con el movimiento de Los Haitises. El apoyo de la Iglesia católica y, en particular, de Antonio Camilo González, a la sazón, obispo de la Diócesis de La Vega, la UASD y la Academia de Ciencias no fueron suficientes para construir una poderosa coalición.

Sin embargo, esta presión política fue suficiente para conseguir que la gestión de Danilo Medina (2012-2016) consultara con expertos técnicos del PNUD sobre el impacto ambiental de las operaciones mineras de Xstrata Nickel/Glencore. Expertos del PNUD estuvieron de acuerdo con los peritos ~~locales~~ de que la minera de níquel en Loma Miranda podría causar ~~daños~~ años al medio ambiente. No obstante, el informe del PNUD dejó abierta la posibilidad para que la empresa presente un proyecto que sería tecnológicamente factible y ecológicamente racional. Mientras tanto, los ambientalistas, ahora liderados por el padre Rogelio Cruz de la Diócesis de La Vega, pidieron al presidente presentar un proyecto de ley al Congreso declarando Loma Miranda como parque nacional, donde la minería no se podría llevar a cabo. El presidente Medina envió un proyecto de ley al Congreso, pero la Cámara Baja lo rechazó. Fue en este contexto que el obispo Camilo González reiteró su apoyo a los ambientalistas y participó en mítines pidiendo que Loma Miranda se convirtiera en un parque nacional. Sin embargo, el Ministerio de Minería, ~~la Cámara de Comercio Americana local~~ y el Consejo Nacional de la Empresa Privada anunciaron su apoyo a la explotación en Loma Miranda, porque la empresa involucrada, Xstrata Nickel/Glencore, era propietaria legal de la zona y estaba dispuesta a revisar sus planes de operaciones mineras. A pesar de estos anuncios públicos, los miembros de la Cámara Baja cambiaron de opinión y proclamaron, junto con el Senado, su apoyo y aprobaron una ley, a una velocidad impresionante, el 28 de agosto del 2014 que declaraba la Loma Miranda un parque nacional. La ley fue aprobada por 28 de los 29 senadores; Félix Nova de Monseñor Nouel votó en contra alegando que tendría un efecto negativo en su provincia. De acuerdo con la nueva ley:

(...) se crea el Parque Nacional Loma Miranda con el propósito primario de conservar las fuentes acuíferas, biodiversidad, la integridad ecosistemática y paisajista, mitigar los impactos del calentamiento global y la perturbación del clima. Además, buscar la preservación de las potencialidades intrínsecas de los recursos ambientales naturales capaces de garantizar su uso y aprovechamiento inteligente por parte de la sociedad dominicana, mediante el desarrollo del ecoturismo, la creación y la educación ambiental (Guzmán, 2014).

El Congreso envió la ley al presidente Medina, pero un día antes de su fecha de vencimiento, la vetó y la renvió al Congreso el 3 de septiembre de 2014. El presidente Medina envió una carta a Cristina Lizardo Mezquita, presidente del Senado, declarando lo siguiente:

(...) luego de un ponderado estudio de su contenido, tengo serias dudas de su compatibilidad con la Carta Fundamental del Estado; por el desconocimiento que conllevaría de compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano en materia de protección de inversiones; y por el efecto adverso para el desarrollo del país de una ley que establezca un Parque Nacional que veda la posibilidad futura de aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro del perímetro, aun cuando las condiciones socioeconómicas y ambientales, y las tecnologías de explotación minera, garanticen su sostenibilidad (carta de Danilo Medina a Cristina Lizardo Mézquita, presidente del Senado de la República, Acento.com.do, 2014).

En su carta, el presidente Medina dejó en claro que tanto senadores como diputados, no habían leído el proyecto de ley con cuidado, porque si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que la ley que pasaron violaba acuerdos y leyes internacionales e incluso aquellas derogadas hace años. Sorprendentemente, el Senado aceptó el veto presidencial sin ninguna objeción. En su editorial del 5 de

septiembre de 2014, el periódico digital Acento.com.do expresó que la cuestión Loma Miranda había cambiado la naturaleza del debate:

(...) el problema ahora ha pasado a ser político, y no necesariamente ecológico. Están en juego muchos temas en este momento, incluyendo el movimiento reeleccionista alrededor del presidente Medina, las aspiraciones del ex-presidente Leonel Fernández, el papel del Comité Político del PLD, los vaivenes en la toma de decisión de los miembros del Comité Político del PLD, los senadores y diputados y su credibilidad, y hasta la inutilidad de las proclamas de Reinaldo Pared, aspirante a la nominación presidencial, quien dejó claro que Loma Miranda sería Parque Nacional (Adames, 2014).

El presidente Medina aprovechó el momento político sabiamente para afirmar su compromiso con los inversionistas extranjeros y recuperar la confianza de la comunidad empresarial, pero, al mismo tiempo, enajenó al movimiento ambientalista que lo había visto como un aliado que había prometido proteger el medio ambiente. Medina reconoció que los ecologistas tenían razón; él les pidió perdón y prometió que Loma Miranda no sería destruida, sino explotada de manera responsable.

Las protestas contra el veto presidencial comenzaron inmediatamente. Está claro que los legisladores alimentaron las expectativas de la población cuando se aprobó una ley declarando Loma Miranda un parque nacional. Algunos activistas en el movimiento ambiental los habían llamado «héroes nacionales». Sin embargo, el veto presidencial y la aceptación obediente del Congreso provocaron rechazo entre los ambientalistas. Medina hizo un llamado a la población a mantener la calma al enviar a la Policía para reprimir a los manifestantes en San Francisco de Macorís y otros pueblos de los alrededores. Los ecologistas habían expresado que «la represión no los va a asustar a ellos y que van a continuar la lucha en defensa de la Loma Miranda» (Hernández, septiembre 2014; Servicios de Acento.com.do., 2014).

Aún no está claro cómo se va a resolver el problema de Loma Miranda. Sin embargo, es posible identificar cuatro factores responsables de este fracaso momentáneo: (1) Los ecologistas no se enfrentan a una firma nacional, sino una corporación multinacional; (2) Los ambientalistas no lograron construir una coalición exitosa para forzar al Congreso y al presidente de la República a declarar Loma Miranda un parque nacional; (3) El veto presidencial demostró la falta de autonomía del Estado vis-à-vis las clases dominantes; era imposible que el presidente Medina actuara contra el interés de los inversionistas extranjeros y nacionales. No obstante, a pesar del revés temporal para lograr su objetivo, los ambientalistas fueron reconocidos como interlocutores válidos por las autoridades públicas, y hasta el veto presidencial, parecía que tenían un «amigo en el Palacio Nacional», pero resultó no ser el caso.

Lo que podemos sacar en limpio de este episodio es que el movimiento ambientalista puede no haber logrado convertir Loma Miranda en un parque nacional, pero planteó la cuestión del derecho ambiental y demostró al Gobierno que no puede emitir fácilmente permisos que dañan el medio ambiente y la salud de la población sin oposición. La lucha de los ambientalistas ha añadido una nueva dimensión a la ciudadanía social y, como tal, obtuvieron una pequeña victoria. Ellos comenzaron una lucha por la protección de las tierras del Estado y con éxito, crearon conciencia sobre Loma Miranda y su importancia. Sin embargo, queda por ver si las distintas organizaciones que llevaron el movimiento podrán reagruparse y montar una lucha exitosa que consiga la atención del Congreso y del presidente.

#### MOVIMIENTO POR EL 4% A LA EDUCACIÓN

A diferencia de los ambientalistas, el 4% para la  educación construyó una coalición exitosa que obligó al Gobierno a comenzar a utilizar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la  educación preuniversitaria. El movimiento del 4% ~~para la Educación~~ se refirió a un tema muy delicado y fue un éxito, ya que llevó a cabo una campaña nacional efectiva para asegurar el apoyo de todo el espectro

político y social nacional. El movimiento consistió en una coalición que incluía a empresas, instituciones religiosas, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación. Durante la campaña electoral de 2012, los partidos políticos dominantes no tenían más remedio que prometer que su candidato emplearía el 4% del PIB para la educación preuniversitaria.

El movimiento del 4% que tuvo sus orígenes en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y fue una respuesta a la incapacidad del Gobierno para cumplir con su obligación de hacer cumplir la Ley General de Educación de 1997, que ordena el uso de 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Esta reclamación se había convertido en una demanda estándar dentro de la ADP desde 1997, pero no fue hasta 2007 que se comenzó en serio a presionar al gobierno para hacer cumplir la ley. A finales de 2006, María Teresa Cabrera (2007-2009) fue elegida presidente de la ADP y comenzó una campaña por el 4% para la Educación, junto con otras organizaciones cívicas. Cabrera logró construir una coalición fuerte que forzó al Estado a cumplir la Ley General de Educación de 1997.

Aunque la mayoría de los Estados latinoamericanos gastan en promedio 5% de su PIB en la educación preuniversitaria, la República Dominicana había estado por debajo del 2%. En consecuencia, los edificios de las escuelas, los sueldos de los docentes y la calidad de la educación pública tocaron fondo, mientras que el costo de la educación privada se disparó. En estas circunstancias, los maestros no podían mantener a sus familias y, a menudo se veían obligados a buscar un segundo empleo. El Estado casi había abandonado sus obligaciones con la educación y «los ciudadanos tuvieron que gastar más de 2/3 de su presupuesto educativo en el registro y la matrícula» (Attali, 2010: 30). En 2008, el Gobierno reconoció que 216,000 niños y adolescentes no asistían a la escuela, cifra que representa el 8% de los niños entre las edades de 5 y 18 años (Ministerio de Economía, 2010: 57).

La campaña de la ADP trabajó para elevar la conciencia nacional sobre la precaria situación de la educación pública y, en 2008, comenzó una campaña en las escuelas donde los maestros invitaban a los padres a aprender sobre el estado de la educación de sus hijos. Los maestros comenzaron a recoger firmas con la esperanza de

presentar una lista de un millón a los candidatos presidenciales de 2008. La campaña incluyó exposiciones llamadas «Cómo vamos en Educación», que mostraba fotografías de escuelas que se encontraban en un estado deplorable, y también de las que estaban en buenas condiciones. Los maestros explicaron al público por qué necesitaban 4% del PIB para la educación. La campaña fue un éxito con un millón de firmas entregadas a Radhamés Camacho, candidato victorioso del sindicato de maestros en las elecciones de 2009. Sin embargo, Camacho no prestó mucha atención a la campaña del 4% (Cabrera, entrevista, 2013). Vale la pena recordar que Camacho es miembro del PLD y del Congreso. Era poco probable que él tomara un tema que Cabrera, una militante de izquierda, había promovido.

Al no continuar Camacho con la campaña del 4%, en enero de 2010, Cabrera y su equipo comenzaron a reunirse con diversas organizaciones cívicas de clase media. Los residentes de los barrios pobres —aquellos con menos educación no condujeron el movimiento— pero solo los que entendían que la educación es importante para el desarrollo (Hernández, 2010: 10). A diferencia de los movimientos populares tradicionales, que estuvieron fuertemente influidos por los partidos políticos y que tienen una estructura jerárquica, este nuevo movimiento era más flexible y tenía un carácter horizontal, la gente podía participar sin necesidad de tener un compromiso serio. En octubre de 2010, el movimiento había atraído la atención de la población en general. Los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, artistas de todas las tendencias, y las agencias de publicidad lanzaron su apoyo al movimiento. Más importante aún, el movimiento emergente tenía aliados en las altas esferas, como la Iglesia católica y la comunidad empresarial.

María Teresa Cabrera dijo al autor que en una tarde de octubre, mientras el sol ardía en frente del Palacio Nacional, a alguien se le ocurrió la idea de usar paraguas para protegerse. Otra persona que sabía de publicidad sugirió el uso de sombrillas amarillas porque «el amarillo significa luz y la educación es la luz». Así aparecieron sombrillas amarillas, corbatas, camisas, pancartas, etc. como medios para atraer la atención sobre el 4% para la educación. Como las manifestaciones comenzaron a reunir apoyo, la Policía llegó a reprimirlos. Por

ejemplo, se agredió al padre Mario Serrano, director del Centro Bonó, una organización jesuita importante en Santo Domingo. La golpiza al Padre Serrano causó el rechazo de la clase media y en la población en general; los medios de comunicación dieron amplia cobertura a los acontecimientos. Serrano llevó la Policía Nacional a los tribunales y un juez determinó que ésta no podía reprimir un movimiento ciudadano que pedía al Gobierno cumplir la ley. Después de este incidente, los programas de televisión y radio comenzaron a dar una cobertura completa al movimiento del 4% para la  educación.

La aparición rápida de este movimiento llevó a la formación de la Coalición por una Educación Digna (CED). A finales de 2010, 203 organizaciones civiles se sumaron a la campaña del movimiento del 4%. Muchas de estas organizaciones se presentaron delante del Congreso para repudiar la aprobación de un presupuesto nacional que no incluía el 4% para la  educación preuniversitaria. En esa ocasión, el CED expresó:

(...) apelamos a la conciencia de los miembros de la Cámara de Diputados para que respondan al reclamo del 91% de la población que, de acuerdo con los últimos datos arrojados por la encuesta de Gallup-Hoy consideran que el 4% del PIB para la educación es necesario. Contamos con que nuestros diputados rechacen el estado de ilegalidad que lleva ya 11 años y que se pretende perpetuar durante el 2011 (*Hoy*, 2010).

La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto, pero el presidente Fernández se acercó a la CED y se comprometió a aumentar el presupuesto de Educación en 10 millones de pesos. De acuerdo con el presidente, el presupuesto de Educación se incrementó de 2.6 a 2.7% del PIB. La CED rechazó la propuesta del presidente y empezó a utilizar la campaña electoral para obtener compromisos de los candidatos para apoyar el 4% para la  educación. La CED logró que todos los candidatos presidenciales se comprometieran con su objetivo. El candidato presidencial Danilo Medina fue más allá de la solicitud de la CED y se comprometió a iniciar un programa de construcción de escuelas y de ampliar la jornada escolar de 4 a 8 horas. Medina ganó las elecciones presidenciales y a pesar de un

enorme déficit presupuestario dejado por su antecesor, comenzó a poner en práctica el compromiso del 4% y prometió construir 18,000 aulas en los dos primeros años de su administración. Para agosto de 2014, Medina había construido solo 6,200 aulas, es decir, aproximadamente un tercio de lo que prometió, pero en una entrevista Cabrera estaba complacida de que el presidente había empezado a aplicar el 4% para la educación (Lora, 2014). Sin embargo, el Estado no había cumplido con sus propios planes para construir 18,000 aulas, revelando así la incapacidad estructural del Ministerio de Educación.

A diferencia del movimiento ambiental que luchó por la Loma Miranda, este movimiento hizo un llamado a una amplia representación de la sociedad incluyendo la élite empresarial, la Iglesia católica, las organizaciones cívicas, las ONG, los sindicales, etc. No impugnó al capital extranjero o nacional; por el contrario, trató de demostrar que la educación es fundamental para el desarrollo social. Los capitalistas, sin duda, entendieron que podían beneficiarse de tener un sistema educativo que elevara los estándares. Curiosamente, el movimiento del 4% se benefició de la fuerte oposición del presidente Fernández a reconocer la validez de sus reivindicaciones. Su oposición les permitió reunir apoyo de una clase media que había visto su nivel de vida reducido sustancialmente, haciéndoles incapaces de enviar a sus hijos a la escuela privada. Este movimiento tuvo éxito porque construyó una amplia coalición de fuerzas que obligaron a la élite política a reconocer que tenía que cumplir una ley que había estado en los libros durante más de una década. Por último, también demostró el valor de la creación de una alianza con los medios de comunicación y otras organizaciones bien situadas para difundir el mensaje en todo el país.

## CONCLUSIÓN

El análisis anterior se basa en la literatura sociológica que vincula los movimientos sociales con el desarrollo de la democratización y la construcción de la ciudadanía social. Esta literatura destaca lo social en la ciudadanía y cómo los movimientos populares son la fuerza impulsora para reclamar derechos como la educación, la protección

del medio ambiente, salud, vivienda, etc. Más allá de esta literatura, en esta investigación se muestra que el proceso de construcción de la ciudadanía social se ve limitado por la condicionalidad de las estructuras globales y locales de poder. Esta condicionalidad explica por qué la globalización neoliberal transformó la economía dominicana al final del siglo xx y produjo un cambio cultural que afectó a los movimientos populares y obligó a su declive.

Además, bajo una gran presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los años 1980 y 1990 el Estado aceptó la erosión de su capacidad para regular las políticas socioeconómicas. Estas nuevas circunstancias afectaron negativamente a los movimientos populares porque tuvieron que gastar enormes cantidades de energía para asegurar la atención de sus demandas. En este contexto, el Estado no tiene la autonomía vis-à-vis el capital global y local para determinar cómo utilizar los recursos para ampliar los derechos de ciudadanía. La reducción de la autonomía del Estado vis-à-vis el capital global y local hace que sea difícil para Estado asignar recursos para ampliar la ciudadanía o incluso reconocer los derechos ambientales. Esto explica, en parte, por qué el presidente Medina no fue capaz de atender el llamado de los ambientalistas que querían transformar Loma Miranda en un parque nacional.

En contraste, el movimiento del 4% no afectó el capital extranjero o nacional. Por el contrario, aumentar el gasto en la educación benefició a ambos. Sin embargo, la aplicación de las políticas neoliberales y la polarización social posterior, finalmente llevaron a que se desarrollara una coalición amplia y fuerte que incluía a la comunidad empresarial, la Iglesia católica, los medios de comunicación, y las organizaciones civiles de clase media. Esta coalición en gran medida tuvo éxito, en parte, debido a la oposición inquebrantable del presidente Fernández para hacer cumplir una ley que ordenaba el uso de 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Su sucesor, Danilo Medina, entendió que no podía ir en contra de un movimiento social que podría convertirse en una poderosa fuerza contra hegemónica, una que podría poner en peligro la estabilidad nacional.

Lo rescatable en estos episodios de lucha es que los movimientos populares de clase media han comenzado a reactivar las luchas por

la construcción de la ciudadanía social. Estos movimientos también han demostrado que los movimientos populares deben construir una fuerte coalición de fuerzas para exigir la ampliación de los derechos ciudadanos. La experiencia del movimiento ambiental y el 4% para la  reación demuestra que dentro del régimen democrático liberal es posible hacer reclamaciones y obtener victorias significativas para ampliar el conjunto de derechos, pero los que participan en las luchas del movimiento popular deben estar preparados para continuar con la lucha después de que una legislación ha sido aprobada ya que, históricamente, la lógica capitalista lleva a bloquear la legislación que amplía los derechos de la ciudadanía. Para los movimientos populares, esto significa que una victoria es solo una etapa en el proceso de construcción de la ciudadanía social; no se agota en la lucha, sino que es el comienzo de otra etapa que sigue una dinámica diferente, centrada en cuestiones concretas en comparación con las múltiples demandas tradicionales de los sindicatos y los movimientos populares. También significa que la relación entre los movimientos sociales y la construcción de ciudadanía es una larga lucha, elaborada con avances y retrocesos. Por último, la construcción de alianzas es importante para conseguir que los derechos sean reconocidos, pero también es necesario mantener un grado de autonomía vis-à-vis del Estado y la élite socioeconómica. Este es uno de los mayores desafíos que enfrentan los movimientos sociales en las sociedades modernas.

#### BIBLIOGRAFÍA

Entrevistas realizadas por el autor en la República Dominicana.

BRETÓN, Víctor (2007). Líder del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Licey al Medio, Santiago, 20 de junio.

CABRERA, María Teresa. (2013). Líder de la ADP y de la Coalición por una educación digna. Santo Domingo, 20 de junio.

DURÁN, Rafael (2014). Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Conversación telefónica realizada el 4 de julio.

- FERREIRA, Pablo (2013). Líder del FALPO en Navarrete, Santiago, 27 de julio.
- PIRÓN, Catalina (2007). Coordinadora general del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA). Santo Domingo, 13 de junio.
- POLANCO, David (2007). Líder del FALPO, Licey al Medio, Santiago, 20 de junio.
- ROJAS, Basilio (2007). Líder del Frente de Lucha y Progreso, Canca la Reina, Moca, 27 de junio.
- Santana, Fidel (2007). Líder nacional del FALPO. Santo Domingo, 5 de junio.

#### Documentos

- Acento (2014). «Carta de Danilo Medina, presidente de la República Dominicana a la Lic. Cristina Lizardo Mézquita, presidente del Senado de la República». Disponible en: <http://www.acento.com.do>. (Consulta: 3 de septiembre)
- ATTALI, Jacques (2010). *República Dominicana, 2010-2020. Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana*. Santo Domingo: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana.
- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (2010). *Un viaje de transformación hacia un país mejor*. Santo Domingo: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo/Consejo Nacional de Reformas del Estado. Marzo.
- VARGAS, Tahira (2014). Correspondencia del autor con la profesora Tahira Vargas.
- PNUD (2008). *República Dominicana 2008: desarrollo humano, una cuestión de poder*. Santo Domingo: Editora Taller.

#### Libros y artículos

- Acento. (Servicios) (2014). «Gobierno aumenta represión y pide al pueblo que no apoye protestas por Loma Miranda». Disponible en: <http://www.acento.com.do> (Consulta: 5 de septiembre).
- Almeida, Paul (2014). *Mobilizing Democracy. Globalization and Citizen Protest*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

- Azzellini, Dario (2012). «De la coetión al control obrero. Lucha de clases al interior del proceso bolivariano». Tesis de doctorado. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Betances, Emelio (2015). «Dominican Grassroots Movement and the Left, 1978-1986», *Science and Society*, Vol. 79, Núm. 3, (Julio):388-413.
- Betances, Emelio (2016). *En busca de la ciudadanía: los movimientos sociales y la democratización en la República Dominicana*. Santo Domingo: Archivo General de la Nación.
- Cassá, Roberto (2004). «Evolución de la protesta social», en *Desde la orilla. Hacia una nacionalidad sin desalijos*, compilado por Silvio Torres-Saillant, Ramona Hernández y Blas Jiménez, 179-198. Santo Domingo: Ediciones Librería Trinitaria.
- Dagnino, Evelina (2003). «Citizenship in Latin America: An Introduction», *Latin American Perspectives*, 129, Vol. 30, Núm. 2, (March):3-17.
- De Schweinitz, Karl (1964). *Industrialization and Democracy: economic necessities and political possibilities*. New York: Free Press.
- Ellner, Steve (2014). «Social and Political Diversity and the Democratic Road to Change in Venezuela», en *Latin America's Radical Left. Challenges and Complexities of Political Power in the Twentieth-First Century*, compilado por Steve Ellner, 79-102. Lanham/Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: Rowman and Littlefield.
- Faxas, Laura (2007). *El mito roto. Sistema político y movimiento popular en la República Dominicana, 1961-1990*. México: Funglode/FLACSO/Siglo XXI editores.
- Figueroa-Ibarra, Carlos (2006). «Protesta popular y cooptación de masas en Guatemala», en *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, compilado por Gerardo Caetano, 143-170. Buenos Aires: CLACSO.
- Franco, Carlos (1994). «Ciudadanía plebeya y organizaciones sociales en el Perú (Otro camino para «otra» democracia). En *Democracia emergente en América del Sur*, compilado por Gerónimo de la Sierra, 95-121. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

- Franco, Carlos (1998). *Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina*. Lima: Friedrich Ebert Stiftung.
- Guzmán, César (2014). «El Senado convierte en ley creación del Parque Nacional Loma Miranda». Disponible en: <http://www.7dias.com.do>. (Consulta: 27 de agosto).
- Hobsbawn, Eric and Ranger, Terence, (comps.). (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Hernández, Francisco Calderón (2014). «Policía Nacional allana viviendas de dirigentes populares en San Francisco de Macoris». Disponible en: <http://www.acento.com.do>. (Consulta: 5 de septiembre).
- Hernández, Juan Ricardo (2010). «Inversión pública, educación y movilización ciudadana en la República Dominicana», ponencia presentada en la 54va conferencia anual de la Western Social Science, Houston, Texas, 11-14 de abril.
- Holston, James (2008). *Insurgent Citizenship: Disjunctions and Modernity in Brazil*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Hoy (2013). «Coalición Educación Digna en parada cívica frente al Congreso», 13 de december.
- Inin, Engin and Turner, Bryan, (comps., 2002), *Handbook of Citizenship Studies*, London: Sage Publications.
- Inin, Engin (2008). *Recasting the Social in Citizenship*. Toronto: University of Toronto Press.
- Jelin, Elizabeth and Herschberg, Eric, (comps., 1996). *Constructing Democracy. Human Rights, Citizenship, and Society in Latin America*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Lora, Huchi (2014). Entrevista a María Teresa Cabrera en el programa de televisión El Día, 22 de agosto.
- Marshall, T.H. (1964). *Class, Citizenship and Social Development*. Garden City: Double Day and Company.
- Merklen, Dennis (2005). *Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires, Editorial Gloria.
- Mitchell, Christopher (2010). «Circumventing the Barriers to Democratization: Civil Society and Reforms in the Dominican

- Republic», Ponencia presentada en la 39vo congreso de la Latin American Studies Association, Toronto, Canada, October.
- O'Donnell, Guillermo (1996). «Illusion about Democratic Consolidation», *Journal of Democracy*, 7, Núm. 3 (July): 112-26.
- \_\_\_\_\_ (2001). «Democracy, Law and Comparative Politics», *Studies in Comparative and International Development* 36, Núm. 1 (Primavera): 7-36.
- Rosario Adames, Fausto (2014). «Otra lectura de la objeción de Danilo Medina al Parque Loma Miranda». Disponible en: <http://www.Acento.com.do> (consulta: 5 de septiembre).
- Rueschemeyer, Dietrich, et al. (1992). *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Spalding, Rose (2014). «El Salvador: Horizontalism and the Anti-Mining Movement», en *Rethinking Latin American social Movements. Radical Action from Below*, compilado por Richard Stahler-Sholk, Harry Vanden y Mark Becker, 311-330. Lanham/Boulder/New York/London: Rowman and Littlefield.
- 7días (2014). «Centro Bonó: Trece años después seguridad social es excluyente y deficiente», recuperado el 3 de agosto de <http://www.7días.com.do>.